REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SESENTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL HOY CINCUENTA Y UNO DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE

Bogotá D.C., trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022)

PROCESO	CONSTITUCIONAL (ACCIÓN DE TUTELA)
DEMANDANTE	JAIME RAMÍREZ PÁEZ
DEMANDADOS	NOTARÍA 38 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTÁ
RADICADO	110014003069 2021 01578 00

Agotado el trámite establecido por la Ley se procede a emitir fallo dentro de la acción de tutela de la referencia en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

El señor JAIME RAMÍREZ PÁEZ solicita la protección de su derecho fundamental de petición el cual afirma, le está siendo vulnerado por el NOTARÍA 38 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTÁ

Informó la accionante que el 5 de noviembre de 2021 presentó derecho de petición a la accionada por medio del cual le solicita la expedición de una copia auténtica de la decisión de fecha 29 de mayo de 1992 por medio de la cual el Juzgado 21 de Familia de esta ciudad decretó la liquidación de la sociedad conyugal que tenía con la señora VICTORIA SANTAMARÍA GRANDA, providencia que fue protocolizada e inscrita en el registro de matrimonio que reposa en la Notaría demandada, sin que a la fecha de presentación de esta acción haya recibido respuesta.

Por lo expresado, solicita el amparo del derecho fundamental de petición y, en consecuencia, se ordene a la NOTARÍA 38 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTÁ, dar respuesta clara, precisa y de fondo.

TRÁMITE

Mediante auto calendado 15 de diciembre de 2021, se avocó conocimiento de la presente acción y se ordenó oficiar a la accionada quien dentro del término concedido contestó en los siguientes términos.

El Notario (E) en escrito enviado señala que no es cierto que la sentencia por medio de la cual liquidó la sociedad conyugal del accionante no se encuentra protocolizada ni elevada a escritura pública en la Notaría pues, aclara que, de conformidad con el art. 72 del Decreto 1260 de 1970 las notificaciones a las notarías por medio de las cuales se declara la nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpos o la de bienes entre los cónyuges tienen como fin la realización de las respectivas notas marginales en los registros civiles; razón por la cual no es esa entidad la autorizada para expedir copia auténtica de ese tipo de decisiones.

Informa que no ha sido posible remitir la respuesta al derecho de petición presentado por cuanto el actor no suministró dirección física ni electrónica para tal fin. Termina solicitando se declare la improcedencia de la acción por contar el demandante con otros medios de defensa, entre ellos el que pida al Juzgado 21 de Familia el documento requerido. Allega la respuesta que, afirma, no ha podido ser enviada al actor.

CONSIDERACIONES

El artículo 86 de la Constitución Nacional establece que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Este mecanismo de orden residual, solamente encuentra procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por lo que, se pone al descubierto que la intención y espíritu del constituyente fue la de introducir una figura alterna o paralela a los juicios y a los procedimientos que constituyen vía común para hacer valer los derechos cuya función se encuentra genéricamente asignada a la administración de justicia y garantizada por la Carta Política.

Es necesario, por tanto, destacar como reiteradamente lo ha expuesto la Corte Constitucional, que, tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de los derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuida a cualquier

autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además, el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio especial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En lo que concierne al derecho de petición, el art. 23 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Dentro del abundante desarrollo jurisprudencial que ha tenido este derecho, se han decantado, en forma general, los siguientes requisitos y presupuestos:

“... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

Por su parte, el artículo 32 de la ley 1755 de 2015 consagra que:

“Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.

Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título.

Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.”

Hechas las precisiones que preceden, entra el Juzgado a decidir.

PROBLEMA JURÍDICO Y CASO CONCRETO

En el caso que hoy ocupa la atención del Juzgado el accionante persigue que se le dé respuesta al derecho de petición que presentó ante la Notaría accionada el 5 de noviembre de 2021.

El Notario en escrito enviado al Juzgado manifiesta que la sentencia por medio de la cual liquidó la sociedad conyugal del accionante no se encuentre protocolizada ni elevada a escritura pública en la Notaría que, acorde con el art. 72 del Decreto 1260 de 1970 las notificaciones a las notarías por medio de las decisiones que declaran la nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpos o la de bienes entre los cónyuges tienen como único fin la realización de las respectivas notas marginales en los registros civiles; razón por la cual no es esa entidad la autorizada para expedir copia auténtica de ese tipo de decisiones.

Comunica igualmente que, no ha sido posible remitir la respuesta al derecho de petición presentado por cuanto el actor no suministró dirección física ni electrónica para tal fin

Al proceder el Despacho el material probatorio aportado encuentra que deberá negarse esta acción constitucional, por lo siguiente.

Es verdad que toda persona tiene derecho a recibir respuesta a una solicitud que presente ante cualquier autoridad o particular, pero, también lo es que, para que ello suceda; lo mínimo que debe informar el peticionario en el escrito es la dirección a la cual se le debe remitir la contestación pues si no lo hace, no se puede pregonar violación al derecho de petición cuando quiera que el receptor del mismo desconoce el lugar a donde debe remitirlo.

En el caso que ocupa la atención del Juzgado, como bien lo indica la accionada, en el derecho de petición que presentó el actor, se guardó absoluto silencio con respecto a la dirección, física o electrónica, donde debía ser remitida la respuesta y ante tal situación, es claro que la demandada a pesar de contar ya con la respuesta al derecho de petición, no podía enviarla.

Como puede verse, si bien el accionante no ha recibido respuesta al derecho de petición que presentó ante la Notaría 38 del Círculo Notarial de Bogotá, lo cierto es que ha sido por su culpa al no informar dirección de remisión.

Ante lo anotado, se reitera, se negará la acción impetrada.

Sin más consideraciones, el Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá D. C., hoy Cincuenta y Uno de Pequeñas Causas, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la acción de tutela invocada por el señor JAIME RAMÍREZ PÁEZ, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

2. ENTÉRESE a las partes la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del decreto 2591/91.

3. De no ser impugnado el presente fallo, REMÍTASE el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Firmado Por:

Luis Guillermo Narvaez Solano
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 069
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9cb5c023118d04e571d0677d10545d6572f14d2682e7e5f7c692156cb97e3cb2**

Documento generado en 13/01/2022 03:46:27 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>